

# *Poder Judicial de la Nación*

Córdoba, 20 de noviembre de 2024.-

## **Y VISTOS:**

Estos autos caratulados: "**HERRERA, CRISTIAN EDUARDO Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 24.769 - ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL – EVASIÓN AGRAVADA**" (Expte. N° FCB 39955/2019/TO1), pasan a despacho para resolver el planteo de nulidad deducido por el abogado defensor Dr. Facundo Cortés Olmedo;

## **Y CONSIDERANDO:**

I.- Con fecha 17 de agosto del corriente año, el Dr. Facundo Cortés Olmedo, en representación de los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig e Ignacio Guillermo Herrera, presentó ante este Tribunal el escrito titulado: "HACE PRESENTE – ACOMPAÑA CONSTANCIAS DE ADHESIÓN A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 27.743 – ACREDITA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA – SOLICITA SOBRESEIMIENTO –".

En concreto, el defensor solicitó el sobreseimiento de sus asistidos, por el delito de asociación ilícita fiscal y, adicionalmente, respecto a Cristián Eduardo Herrera el sobreseimiento por el delito de evasión agravada (arts. 15 inc. C y 2 de la Ley 27.430), cuya acción penal fue suspendida mediante resolución dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, con fecha 25 de agosto de 2021.

Fundamentó su petición en lo dispuesto en los arts. 5 de la Ley 27.743 y 1 del Decreto Reglamentario 608/2024. En virtud de ello, y de los argumentos que expuso –a los cuales nos remitimos en honor de la brevedad– refirió que, el 16 de agosto pasado, el encartado Cristian Eduardo Herrera canceló íntegramente la deuda tributaria que originó la imputación por evasión agravada, en el marco de una asociación ilícita fiscal constituida con Micaela Schörnig e Ignacio Guillermo Herrera, conforme al requerimiento fiscal de instrucción y la elevación a juicio.

Así, indicó que dicha deuda se regularizó mediante plan de pagos, según lo previsto por la Ley 27.451 y modificatorias y se canceló, bajo las condiciones estipuladas en la Ley 27.743.

USO OFICIAL

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

En abono a su petición, citó el voto de las Juezas de Cámara Dras. Carolina Prado y Noel Costa en los autos caratulados. “*Santiago Oscar y otros p.ss.aa Inf. Ley 24.769*” (Expte. 12000035/2012/TO1), en la sentencia dictada el 16 de agosto del corriente año.

**II.-** En virtud de lo peticionado por el defensor, este Tribunal requirió al Administrador de AFIP- sede Córdoba, que informara el estado y cumplimiento de los planes de facilidades de pago de Cristian Eduardo Herrera.

**III.-** Posteriormente, vía *DEO N° 15438836*, el Director de la Dirección Regional Córdoba de DGI-AFIP, informó que el plan de facilidades de pago N° N721828, suscripto en los términos de la Ley 27.562 por Cristian Eduardo Herrera, fue refinanciado y cancelado el 15.08.2024, en un plan de pagos en los términos de la Ley 27.743.

**IV.-** En razón de la naturaleza de las cuestiones planteadas, y de lo peticionado por el Dr. Cortés Olmedo, el Tribunal corrió vista a las partes.

**V.-** Seguidamente, se corrió vista al señor Fiscal General Dr. Carlos María Casas Nóbrega quien dictaminó en contra de lo solicitado por la defensa de los justiciables argumentando. En primer lugar, que respecto a la petición sobreseimiento del imputado Cristian Eduardo Herrera por el delito de evasión agravada, señaló que el Tribunal no tiene jurisdicción para resolverlo, ya que dicho delito no fue elevado a juicio por haberse suspendido la acción penal en su contra mediante resolución de fecha 25.08.2021 dictada por quien fuera titular del Juzgado Federal N°1 de esta ciudad de Córdoba.

En segundo lugar, respecto a la solicitud de sobreseimiento por el delito de asociación ilícita fiscal, manifestó que de la lectura de la Ley 27.743 no se advierte que dicho tipo penal se incluya entre los supuestos que habilitan la extinción de la acción penal (art. 5, segundo párrafo del citado cuerpo legal), mientras que el art. 1 del Decreto Reglamentario 608/2024 incluye el art. 15 inc. C de la Ley 27.430. A su vez, señaló que tras analizar el debate parlamentario de la Ley 27.743 no surge referencia a la posibilidad de extinguirse la acción penal por tal delito, advirtiendo allí un exceso en las facultades reglamentarias previstas en la Constitución Nacional (art. 99 inc. 2).

---

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

## *Poder Judicial de la Nación*

En abono a su postura, citó jurisprudencia, específicamente el voto del Juez Federal Dr. José Fabián Asis, en los autos: “*Santiago, Oscar y otro*” y “*Cuello, Fernando Luis y otros*” como así también los criterios de las Salas I, III y IV de la CFCP.

Sentado lo anterior, indicó que el Poder Ejecutivo al incluir la asociación ilícita fiscal —entre los tipos penales susceptibles de amnistía— se excedió en sus facultades reglamentarias asignadas constitucionalmente, y en consecuencia, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto Reglamentario 608/2024 en cuanto incluyó a las conductas previstas en el art. 15 inc. C de la Ley 27.430 y la petición de sobreseimiento por extinción de la acción penal presentada por el abogado defensor.

Por último, hizo reserva de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal y dejó planteada la cuestión federal.

VI.- A continuación, se presentó el Dr. Mariano Abel Ezeyza apoderado de la Unidad de Información Financiera -UIF- y Director de la Dirección de Litigios Penales indicando que corresponde hacer lugar a lo peticionado por el Dr. Cortés Olmedo en beneficio de sus asistidos. Ello, toda vez que no surge que los imputados ni la empresa “Panno Textil S.A” estuvieren comprendidos en las causales de exclusión previstas en el art. 4 de la Ley 27.743.

Sintéticamente, expuso que en complemento con la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se sancionó la Ley 27.743 que prevé una serie de medidas que permiten regularizar obligaciones fiscales con el beneficio de la condonación de sanciones en relación a dichos incumplimientos, a tenor de los argumentos de hecho y de derecho plasmados en su presentación —a los cuales nos remitimos en honor de la brevedad—.

En concreto, refirió que la redacción de la ley es amplia y no requiere espontaneidad —como si otros tipos de regímenes extintivos previstos para delitos tributarios que excluyen la aplicación de la extinción de la acción penal—. Por lo tanto, consideró que los beneficios de condonación de sanciones ingresan dentro de la definición de las amnistías a las que refiere el art. 59 inc. 2 del Código Penal.

USO OFICIAL

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

Por otra parte, mencionó que AFIP mediante la Resolución General 5525/2024 no modificó los alcances de los beneficios del texto legal y, que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 608/20244, Capítulo I, aclaró que la condonación abarca los delitos fiscales comunes enumerados en los arts. 8, 9, 10, 11 y 15 inc. C de la Ley N° 27.430.

A partir de ello, sostuvo que los beneficios resultan aplicables a todos los delitos del Régimen Penal Tributario y, no resulta constitucionalmente válido en nuestro ordenamiento jurídico otorgarle —vía interpretativa o jurisprudencial— un alcance más restrictivo que el que establece la ley.

Añadió que la cancelación total de la deuda tributaria, efectuada por Herrera, produce la extinción de la acción penal de los delitos regulados por el Régimen Penal Tributario y genera un efecto extensivo hacia los demás intervinientes en tales delitos.

En sintonía con lo expuesto, refirió que —según la plataforma fáctica— la asociación ilícita fiscal configura el delito precedente del lavado de activos, y la consecuencia directa de la aplicación de la Ley 27.743, es el dictado de sobreseimiento por el delito de lavado de activos por atipicidad, ya que borrada la criminalidad del hecho tipificado como asociación ilícita tributaria, desaparece la existencia del hecho precedente.

Así, concluyó que, por economía procesal, corresponde el sobreseimiento de los imputados por el delito de lavado de activos.

**VII.-** A su turno, el Dr. Rodrigo Altamira en representación del imputado Carlos César Bonaldi, adhirió en todo al planteo efectuado por el Dr. Cortés Olmedo.

En tal sentido, expuso que Bonaldi —según el requerimiento fiscal y el auto de elevación a juicio— está acusado por los delitos de lavado de activos de origen ilícito agravado y asociación ilícita fiscal, es decir, por los mismos delitos atribuidos a Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schöring e Ignacio Guillermo Herrera, con lo cual, si prosperara la petición de sobreseimiento y extinción de la acción penal presentada por el colega, desaparecerían los ilícitos investigados y, en consecuencia, se derrumbaría la acusación contra su

Fecha de firma ~~asistido~~

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

## *Poder Judicial de la Nación*

Asimismo, agregó que el delito de lavado de activos, requiere para su consumación de un delito precedente —inexistente y que resultaría atípico— así que las consecuencias jurídicas favorables de los coimputados, se extenderían a la situación procesal de Bonaldi ya que la plataforma fáctica es la misma.

Por último, indicó que corresponde que se declare el sobreseimiento definitivo de su representado por extinción de la acción penal (arts. 336 inc. 1 del CPPN y 59 del CP texto según ley 27.147).

**VIII.-** Posteriormente, y mediante proveído obrante a fs. 2797 el Tribunal corrió vista a las partes sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado por el Fiscal General, respecto al Decreto Reglamentario 608/2024 art. 1, en cuanto incluyó a las conductas previstas en el art. 15, inc. “c” del Régimen Penal Tributario -Ley 27.430-.

**IX.-** Con fecha 30 de septiembre de 2024 se presentó el Dr. Cortés Olmedo a los efectos de contestar el traslado y solicitó que se rechace la petición efectuada por el Ministerio Público Fiscal.

En apretada síntesis, el letrado indicó que en la interpretación de las leyes penales —amnistía lo es— existen principios que configuran guías hermenéuticas que no pueden soslayarse so riesgo de desnaturalizarse la estructura jurídico-filosófica sobre la que se asienta el sistema penal liberal y democrático vigente en nuestro país. Los principios pro homine, ultima ratio y subsidiariedad constituyen faros que permiten darle a la norma penal sentido y alcance fiel con el marco jurídico político, con lo que, en casos de oscuridad, aparente contradicción o lagunas de las leyes la salida debe buscarse en tales principios.

Expuesto lo anterior, estableció que es improcedente el planteo de inconstitucionalidad y que la pretensión del Fiscal se encuadró —únicamente— en su obligación de mantener la vigencia de la acción penal, pero prescindió de los principios y las garantías constitucionales.

Asimismo, en relación a la ausencia en la Ley 27.743 de la extinción del delito de asociación ilícita fiscal tras regularizarse la deuda tributaria, puntualizó

que ésta no especifica a ningún delito en particular, ni tributario ni aduanero y,

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

sostuvo que la ausencia de una referencia —expresa— no constituye un argumento idóneo para poner en crisis la vigencia y validez del Decreto 608/2024 que precisó y aclaró los alcances de la norma legal. En abono a su postura, citó jurisprudencia.

Expuesto lo anterior, destacó que el Decreto se dictó dentro de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de regular los detalles necesarios para asegurar la aplicación y eficacia de la Ley 27.743.

Finalmente, peticionó que se rechace el planteo de inconstitucionalidad, y se haga lugar al sobreseimiento solicitado, como así también a la petición formulada por la UIF respecto a los delitos de lavado de activos, a cuyos argumentos adhirió.

**X.-** A continuación, se presentó el Dr. Ezeyza apoderado de la UIF y estableció que el planteo de inconstitucionalidad debe rechazarse, toda vez que el Decreto Reglamentario 608/2024 resulta ajustado a derecho y respeta los términos establecidos por la Constitución Nacional.

Expuso que la excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad de una norma obliga a extremar sus esfuerzos interpretativos y sólo puede operar cuando ésta no pueda compatibilizarse con la Constitución Nacional — en este caso Decreto Reglamentario— el cual zanjó de manera definitiva y clara la cuestión, ya que la asociación ilícita fiscal fue expresamente incluida en los delitos susceptibles de ser amnistiados cuando se cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 27.743.

Por último, indicó que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 608/2024 aclaró que el beneficio de la condonación abarca a los delitos fiscales enumerados en los arts. 8, 9, 10, 11 y 15 inc. C de la Ley N° 27.430, con lo cual su contenido no desnaturaliza ni le brinda un alcance distinto al pretendido en la ley.

**XI.-** Posteriormente, se presentó el Defensor Público Oficial y expresó que la declaración de inconstitucionalidad importa un hecho sumamente grave a nivel institucional y de carácter excepcional, que no se verifica en este caso.

Añadió que el Decreto 608/2024 es producto de una facultad expresa otorgada por mandato constitucional al Presidente de la Nación y que se limitó —dentro

Fecha de firma: 11/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

## *Poder Judicial de la Nación*

de sus atribuciones— a reglamentar la Ley 27.743, que estipula la amnistía de todos los delitos tributarios y comprende a la asociación ilícita fiscal como uno de los delitos posibles de ser adheridos al blanqueo, con la consecuente extinción de la acción penal y el sobreseimiento.

Así, estableció que no se observa en el decreto que el Poder Ejecutivo de la Nación se hubiere extralimitado o atribuido funciones parlamentarias reservadas exclusivamente al Poder Legislativo, como así tampoco se alteró el espíritu de la norma con la excepción reglamentaria. En abono a su postura, citó jurisprudencia (*Expte. 12000035/2012/TO1*).

Por último, peticionó que se rechace el planteo de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público Fiscal.

**XII.-** Ahora bien, ingresando al análisis de las cuestiones traídas a estudio, resulta oportuno tener presente que, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio (fs. 2474/2495), el auto de elevación a juicio (fs. 2645/2656) y la aclaratoria-ampliación de éste (fs. 2657/2660)—en lo que aquí interesa— los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi están acusados por el delito de asociación ilícita fiscal, en carácter de organizadores y partícipe necesario, respectivamente (art. 45 del C.P. y art. 15, inc. “c” in fine de la Ley 24.769 y 27.430) (hecho nominado segundo).

### **Voto del Juez de Cámara Dr. Jaime Díaz Gavier:**

Así las cosas, corresponde abordar —en primer término— el tratamiento de la solicitud de sobreseimiento de los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi en orden al delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c de la ley 24.769) en virtud del art. 5 de la ley 27.743 y art. 1° del decreto reglamentario 608/2024 efectuado por el Dr. Cortes Olmedo y el Defensor Público Oficial, Dr. Rodrigo Altamira.

Adelanto mi opinión en el sentido de que no se hará lugar al planteo defensivo, en consonancia con el dictamen del señor Fiscal General, por las razones que a continuación expongo.

En orden a la petición de sobreseimiento de los imputados con respecto

al delito de Asociación Ilícita Fiscal, el Representante del Ministerio Público

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

Fiscal sostuvo la inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario, por entender —según argumentó— que, al dictarlo, el Poder Ejecutivo se excedió en la competencia que le atribuye la Constitución Nacional. Además, señaló que, en el marco de la discusión parlamentaria, el legislador no había demostrado la intención de incluir a ese delito en la Ley.

Por lo que, se debe analizar si la inclusión en el decreto reglamentario de esta figura penal constituye un exceso, como lo sostiene el Ministerio Público Fiscal, o si, por el contrario, se encuentra dentro de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

En este sentido, corresponde advertir que la Ley N°27.743 al establecer los dos regímenes reseñados no fija un catálogo de delitos que abarca, simplemente señala que se aplica a los tipos penales contenidos en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) -y las leyes tributarias que le precedieron-, indicando en el art. 2 que la norma comprende a: *“Los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones”*, siempre estableciendo obligaciones vencidas y determinadas.

Mientras que el Decreto N°608/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, en su art. 1 incluyó expresamente el delito de asociación ilícita fiscal, como un delito susceptible de extinción de la acción penal. Dada la particularidad apuntada, como operador del sistema judicial, es mi deber interpretar los textos legales conforme a su sentido y velar por su correcta aplicación a la luz de los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional.

En concreto, el artículo 99 de la Constitución Nacional de la República Argentina regula las facultades del presidente de la Nación. Así, en el inciso 2 se establece que tiene la atribución de expedir reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar





## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

su espíritu con excepciones reglamentaria. Seguidamente el segundo párrafo del inciso 3 establece que: *“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, quienes deberán refrendarlos junto con el jefe de gabinete de ministros.”*

En definitiva, este artículo limita la facultad del Poder Ejecutivo para emitir disposiciones legislativas, permitiéndolo solo en casos excepcionales y bajo un proceso riguroso, con el fin de salvaguardar la división de poderes y el funcionamiento democrático, siendo una garantía contra el abuso en asuntos que requieren un debate más amplio y representativo, como el que ofrece el Congreso de la Nación.

Al respecto, la jurisprudencia de la C.S.J.N. con carácter general ha fijado pautas a fin de determinar la razonabilidad del uso de la potestad reglamentaria de una norma legislativa. Así, sostiene que *“la potestad reglamentaria habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contempladas por el legislador de una manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que ésta. En ese sentido el exceso reglamentario se configura cuando una disposición de ese orden desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu o finalidad, contrariando de tal modo la jerarquía normativa, lo que requiere un sólido desarrollo argumental que lleve, como última ratio, a la invalidación de la norma cuestionada.”* (Fallos: 337:149; 324:3345; 325:645; 323:2395; 322:1318; 319:3241). A su vez, especificó que, *“el órgano dotado de*

*potestad reglamentaria está habilitado para establecer condiciones, requisitos,*

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

*limitaciones o distinciones que respeten el espíritu de la norma, sirvan razonablemente a su finalidad, y no rebasen el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la solución entre varias alternativas".* (Fallos: 308:1897; 313:433; 327:5002), puntualizando que: *"es la razonabilidad con que se ejercen las facultades reglamentarias el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto."* (Fallos: 327:5002; 323:620) y sosteniendo que, *"las normas reglamentarias son válidas sólo en la medida en que se ajusten al texto y al espíritu de la ley a reglamentar"*. (Fallos: 330:304; 311:2339).

Así, estas pautas determinan que el principal límite a la potestad reglamentaria constituye el respeto por el espíritu de la ley sancionada por el Congreso, de modo que la disposición reglamentaria no exceda, altere, restrinja o distorsione el espíritu de la ley.

Al objeto del análisis, no prescindo del concepto —plasmado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— según el cual la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal "es un acto de suma gravedad y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y que por ello debe considerarse como la última ratio del orden jurídico y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, o bien cuando se trata de una objeción constitucional palmaria, de tal forma que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera" (cfr. CSJN, Fallos:258:60; 292:211; 296:22, entre otros).

En este sentido, el máximo Tribunal del país ha señalado que la inconstitucionalidad sólo puede operar cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que forman parte de ella (CSJN, Fallos:285:322; 288:325; 290:226).



# *Poder Judicial de la Nación*

De esta forma, la declaración de inconstitucionalidad es un recurso de carácter excepcional, que debe considerarse únicamente cuando existe una contradicción manifiesta entre una norma y una disposición constitucional.

Así las cosas, tras un análisis riguroso del texto legal, del debate parlamentario y de los fines perseguidos por la ley, debo señalar que el Poder Ejecutivo de la Nación, al dictar el Decreto Reglamentario N°608/2024, excedió sus facultades reglamentarias consagradas constitucionalmente.

Es que al incluir en el art. 1 del Decreto reglamentario el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario) entre los tipos penales susceptibles de ser amnistiados por aplicación del art. 5 de la ley 27.743, alteró el espíritu y la finalidad que persigue la ley reglamentada, vulnerándose, de este modo, el principio de legalidad.

Dando fundamento a mi postura, en primer lugar, debo señalar que durante el debate parlamentario no se mencionó específicamente el delito de asociación ilícita fiscal dentro de los delitos tributarios susceptibles de extinción a través de la adhesión a la presente ley o a legislaciones anteriores sobre regularización y exteriorización de deuda.

En esta línea, la norma reglamentada es clara en cuanto a que su alcance se limita a acciones vinculadas a obligaciones dinerarias, es decir, a delitos que involucren un contenido patrimonial específico. Por su parte, la figura penal de la asociación ilícita fiscal —en este sentido— no tiene tal naturaleza.

El legislador no contempló esta figura, justamente, porque el tipo penal de asociación ilícita fiscal – a diferencia de otros delitos tributarios- no genera una obligación dineraria susceptible de ser "cancelada", es decir, carece de contenido patrimonial. Y ese, es precisamente, el fin esencial de la ley 27.743, mejorar los niveles de recaudación a favor de la Hacienda Pública.

En ese orden, lo que es susceptible de regularización son las obligaciones cuantificables, mientras que la actividad criminal organizada orientada a la comisión de ilícitos tributarios queda excluida de las previsiones del legislador.

USO OFICIAL

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

Por ello, de la interpretación literal, integral y sistemática de la norma y del propio examen del debate parlamentario cabe concluir que el delito previsto en el artículo 15, inciso c de la Ley 24.769, no queda abarcado dentro de la liberación prevista en el art. 5 de la Ley 27743.

Esta distinción, se debe a que la existencia de asociaciones ilícitas fiscales no solo perjudica al erario público, sino que también afecta al "orden público", cuya vulneración no puede ser subsanada ni mediante blanqueo de bienes ni a través de pagos monetarios.

Cabe señalar que idéntico criterio expresó este Tribunal, en el marco de los autos “Cardoso, María Pía y otros s/Asociación Ilícita Fiscal” (Expte. FCB 53010068/2007/TO1), al señalar —siguiendo lineamientos dados por la CFPC, Sala IV— que: *“la extinción de la acción penal prevista en el art.9 de la ley 26.860 -en forma similar a lo dispuesto por el art. 46 inc. “b” de la Ley 27.260- se encuentra regulada y prevista para los supuestos en los que el sujeto regularice su situación por una deuda propia, es decir por sus obligaciones evadidas (...) Se blanquean diferencias patrimoniales que el obligado tiene, las que deben ser comunicadas a los fines de eximirse de acciones civil, comercial y penal tributaria. Es éste el alcance e interpretación que corresponde asignar, al precisarse el sujeto habilitado para solicitar tal amnistía. En tal sentido (...) el vocal de la CFPC Dr. Mariano Borinsky afirmó (...) que la extinción de la acción penal prevista “...por el art. 32 inc. b) de la ley 26.476 - con igual alcances al art. 9 inc. b) 26.860 aquí invocados- atiende a los supuestos en los que el sujeto regulariza su situación por deuda propia, es decir, por sus obligaciones vencidas...el beneficiario de las liberación alcanza a las acciones penales que se siguen en contra de un sujeto siempre y cuando la regularización sea respecto de las transgresiones que constituyen el objeto procesal de la causa penal en trámite. Se recordó que en el caso María Pía Cardoso no se encuentra imputada en razón de su propia evasión impositiva sino, por el contrario, lo que se le atribuye es su calidad de miembro en la asociación ilícita fiscal que tenía como objeto comercializar marginalmente cereales en sus distintas etapas, encubriendo a los verdaderos productores (sujetos obligados al pago del tributo) mediante el reclutamiento de personas a manera de prestas*

Fecha de firma: 2024/04/10

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

## *Poder Judicial de la Nación*

nombres (generalmente indigentes, a quienes se inscribió como monotributistas)... siendo que la evasión de impuestos no resulta la conducta típica que aquí se investiga, es que el objeto procesal del caso no puede ser cancelado mediante el acogimiento que la ley 26.860 ha previsto...”.

“En consecuencia, siendo que la evasión de impuestos no resulta la conducta típica que aquí se investiga, es que el objeto procesal del caso no puede ser cancelado mediante el acogimiento que la Ley 27.860 ha previsto, desde que la acción delictual que no genera en sí misma una obligación tributaria no puede ser cancelada mediante la aplicación de la amnistía prevista por el art. 9 inc. b) de la ley 26.860

Es decir, el tribunal casatorio, en esa oportunidad, entendió que la norma de amnistía —vigente en ese momento— no podía ser aplicable al delito de asociación ilícita fiscal por no generar en sí mismo una obligación tributaria. Ello, precisamente, porque el fin esencial que ha tenido, a lo largo del tiempo, las leyes de blanqueo y amnistía ha sido aumentar la recaudación de la hacienda pública y no beneficiar el fraude fiscal organizado.

De igual manera, me expedí al integrar los autos caratulados: "Cuello, Fernando Luis y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal" (Expte. 62000069/2008) tramitados ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, mediante sentencia de fecha 7.12.2022 *“los tipos penales de evasión tributaria y retención indebida de tributos se tornan atípicos por amnistía ante el pago, no así la asociación ilícita fiscal, que constituye un objeto procesal diverso y que no puede ser cancelado por acogimiento a un régimen especial”*; criterio que fue confirmado por la C.F.C.P. Mediante resolución de fecha 22/05/24, cuando expresó: *“(…) Tal como llevo dicho, el tipo penal de asociación ilícita tributaria es un delito de peligro e implica un adelantamiento de la punibilidad de modo autónomo a la posible comisión de delitos fines –lesión- y con prescindencia entonces de su constatación. Es el formar parte de esos vínculos asociativos lo que determina la imputación, como riesgo penalmente relevante de características abstractas –a partir del enunciado típico- y no la concreción de los ilícitos que puedan ser su consecuencia. De esta forma, la extinción de la acción y el sobreseimiento de los imputados por los delitos en particular*

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

*cometidos, no implica que la asociación ilícita también quede abarcada por la amnistía fiscal. En este punto, debo hacer notar que el tipo penal tipificado en el art. 15 inc. c de la ley 24.769 no está directamente vinculado a una obligación tributaria en concreto ni sus autores requieren ninguna cualidad especial -contribuyente-. Este aspecto normativo es lo que diferencia el tipo de injusto bajo trato, de los delitos de evasión y apropiación indebida de tributos por los que los recurrentes fueron finalmente sobreseídos o tienen la acción penal suspendida. Es que, tal como lo resaltó el a quo, el bien jurídico protegido es la hacienda pública pero como parte del orden público general, cuya tranquilidad o estabilidad puede ser gravemente vulnerada por lazos asociativos orientados, directamente o a través de su favorecimiento, a su afectación. Así, no puede sostenerse válidamente que la reparación del daño por el pago de las sumas adeudadas neutralice el progreso de la imputación por la asociación ilícita tributaria. Justamente, este ilícito no se agota en el solo resguardo del erario público, sino que atiende específicamente al entorno de aseguramiento del orden que es su condición”*

Cabe mencionar que la postura aquí asumida se corresponde con el criterio que adopté en autos: “Giovanardi, Carlos Alberto y otros s/Asociación Ilícita Fiscal” (Expte FCB 1357/2014) con fecha 29/10/24. En dicha oportunidad y, por las mismas razones aquí expuestas, concluí que: *“el Poder Ejecutivo ha incurrido en una intervención indebida e inconstitucional, alterando el espíritu de la ley al incluir tipos penales no previstos por el legislador, por lo que no corresponde hacer lugar al pedido de sobreseimiento de los imputados en orden al primero hecho (asociación ilícita fiscal) debiendo proseguir la causa según su estado”*.

En conclusión, el Poder Ejecutivo incurrió en una intervención indebida e inconstitucional al incluir tipos penales no previstos por el legislador y, de esa manera, se alteró el espíritu de la ley vulnerándose el principio de legalidad.

Por los fundamentos dados, estimo corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario N° 608/2024, artículo 1, en cuanto incluye a las conductas previstas en el art. 15, inc. “c” de la Ley 27.430, **toda vez que transgrede el principio de legalidad.**



## *Poder Judicial de la Nación*

Es por ello que debe rechazarse el pedido de sobreseimiento de los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi por el delito de asociación ilícita fiscal, peticionado por los Dres. Facundo Cortés Olmedo y Rodrigo Altamira -Defensor Público Oficial-.

Por su parte, con relación al pedido de sobreseimiento a favor de Cristian Eduardo Herrera con relación al delito de evasión agravada (art. 2 del Régimen Penal Tributario), efectuada por el Dr. Facundo Cortés Olmedo, corresponde señalar que este Tribunal carece de competencia para ingresar a su tratamiento.

Ello así, en razón de que el hecho por el cual se acusa al nombrado por el delito de evasión no fue elevado a juicio. De las constancias de autos, surge que el Juzgado Federal N°1 de esta ciudad, mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2021 resolvió: *“suspender la acción penal a favor de Cristian Eduardo Herrera (...) en los términos del art. 2 del nuevo régimen penal tributario previsto en la ley 27.430, hecho nominado segundo...”*.

Por lo expuesto, remítase copia del pedido de sobreseimiento de Cristian Eduardo Herrera con relación al delito de evasión agravada (art. 2 del Régimen Penal Tributario) al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a sus efectos.

Previo a concluir, más allá de la solución propiciada, se deja expresado que no corresponde tratar el pedido de sobreseimiento en orden al delito de lavado de activos efectuado por la UIF.

Cabe recordar que este Tribunal, mediante auto interlocutorio de fecha 1 de octubre del corriente año resolvió declarar la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio Fiscal (fs. 2474/2495), del requerimiento de elevación a juicio de la UIF (fs. 2506/2539), del auto de elevación a juicio (fs. 2645/2656), su aclaratoria- ampliación (fs. 2657/2660), el proveído de citación a juicio (art. 354 C.P.P.N.) —dictado por este Tribunal con fecha 27.11.2023—, respecto al hecho nominado tercero, en relación a los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera, Gerardo Luis Cuevas Lescano y Carlos César Bonaldi. Como consecuencia de ello, se

remitieran copias de las actuaciones al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, para

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

que reformule o readecue la imputación de los nombrados para su correcta comprensión y defensa.

De las constancias de autos, surge que la investigación por el delito lavado de dinero se encuentra actualmente en etapa de instrucción, razón por la cual, escapa a la competencia de este Tribunal resolver planteos vinculados a esos hechos.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el pedido de sobreseimiento en orden al delito de lavado de activos efectuado por la UIF. Así voto.

**Voto del Juez de Cámara Dr. José Fabián Asís dice:**

Tal como lo sostuviera en mi voto en autos: “Santiago, Oscar y otros p.ss. aa. Infracción Ley 24.769” (Expte. 12000035/2012/TO1), en cuanto expresé que el Decreto Reglamentario n° 608/2024 excede el espíritu de la ley n° 27.743, compartiendo los argumentos brindados por el magistrado preopinante, entiendo, que no corresponde hacer lugar al pedido de sobreseimiento en orden al delito de asociación ilícita fiscal formulado por las defensas.

En este sentido, señala que recientemente se sancionó la Ley N° 27.743 denominada “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” (fecha 27/06/24, publicada en el B.O. 8/7/24) que contempla dos regímenes diversos: “Regularización de Obligaciones Tributarias Aduaneras y de la Seguridad Social” (Título I) y “Régimen de Regularización de Activos” (Título II).

Ambos regímenes, persiguen mejorar los niveles de recaudación, conforme expresamente se manifiesta en el mensaje de envío del proyecto de ley del Poder Ejecutivo: *En lo que respecta específicamente a la crisis fiscal, su causa se encuentra en el desbalance de las cuentas públicas generado por el Estado, quien en forma recurrente y continua ha realizado erogaciones por encima de sus ingresos... Las medidas implementadas, entre las cuales se encuentran aquellas adoptadas por la Ley N° 27.725, han tenido como consecuencia directa una merma de los recursos fiscales del Estado, elevando aún más los ya altos niveles de déficit fiscal, hecho que dificulta seriamente el proceso de saneamiento de las cuentas fiscales que se ha iniciado el pasado*

*10 de diciembre. No quedan dudas al respecto, el Estado Nacional se*

*Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO*

*Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA*



#38330845#436023590#20241120124903023



## *Poder Judicial de la Nación*

*encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva.*

Con lo cual, a fin de atraer la presentación “espontánea” de contribuyentes a dichos regímenes se ofrecen una amplia gama de beneficios fiscales y procesales —como la suspensión y, en su caso, la extinción de las acciones penales en curso—.

Así, con relación a los efectos que trae acogerse al régimen previsto en el Título I, el art. 5 establece: (...) La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de la cancelación.

La referida norma fue reglamentada por el Decreto 608/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, y en lo que respecta al REGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL —es decir, al régimen previsto en el Título I—, el art. 1 establece: *La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad.*

Así las cosas, puesto a decidir sobre la cuestión traída a estudio comparto la postura del MPF al formular el planteo de inconstitucionalidad, al señalar que el Poder Ejecutivo Nacional, al dictar el decreto reglamentario 608/2024, excedió las facultades que le concede el art. 99 inc. 2 de la CN, al prever que el presidente de la Nación tiene la atribución de expedir reglamentos para la ejecución de leyes de la Nación siempre y cuando los

mismos no alteren su espíritu con excepciones reglamentarias.

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

Según se observa, al incluir en el art. 1 del Decreto reglamentario el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15, inciso c, del Régimen Penal Tributario) entre los tipos penales susceptibles de ser amnistiados por aplicación del art. 5 de la ley 27.743, desconoció el espíritu y la finalidad que persigue la ley reglamentada y constituye un exceso en las facultades previstas por la Carta Magna desde que tras analizar el debate parlamentario de la referida Ley 27.743 no surge la más mínima referencia a la posibilidad de extinguir la acción penal en relación al referido tipo penal. Por otra parte, debemos tener presente que en materia tributaria, concurre la imposibilidad legal de que el Poder Ejecutivo de la Nación pueda establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la eximición total o parcial del capital, intereses, multas u otra sanción derivada de infracciones relacionadas con los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la AFIP, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía (art. 1 Ley 25.678).

En tal sentido y dada la particularidad apuntada, corresponde interpretar el alcance de la norma a la luz de la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal que con carácter general ha fijado pautas a fin de determinar la razonabilidad del uso de la potestad reglamentaria de una norma legislativa. Así, sostiene que *“la potestad reglamentaria habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contempladas por el legislador de una manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que ésta. En ese sentido el exceso reglamentario se configura cuando una disposición de ese orden desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu o finalidad, contrariando de tal modo la jerarquía normativa, lo que requiere un sólido desarrollo argumental que lleve, como última ratio, a la invalidación de la norma cuestionada* (Fallos: 337:149; 324:3345; 325:645; 323:2395; 322:1318; 319:3241). Especificando que, *“el órgano dotado de potestad reglamentaria está habilitado para establecer condiciones, requisitos,*



## *Poder Judicial de la Nación*

USO OFICIAL

*limitaciones o distinciones que respeten el espíritu* de la norma, sirvan razonablemente a su finalidad, y no rebasen el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la solución entre varias alternativas”. (Fallos: 308:1897; 313:433; 327:5002). Puntualizando que es la razonabilidad con que se ejercen las facultades reglamentarias el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto. (Fallos: 327:5002; 323:620). Sosteniendo que, “las normas reglamentarias son válidas sólo en la medida en que se ajusten al texto y al espíritu de la ley a reglamentar”. (Fallos: 330:304; 311:2339).

Estas pautas que determinan que el principal límite a la potestad reglamentaria constituye el respeto por el espíritu de la ley sancionada por el Congreso, de modo que la disposición reglamentaria no exceda, altere, restrinja o distorsione el espíritu de la ley.

Por otra parte, es sabido que el bien jurídico abarcado por el tipo penal asociación ilícita fiscal, por resultar una anticipación punitiva, abarca tanto las conductas que efectivamente lesionan la hacienda pública -en su faz dinámica- como también aquellas conductas que exterioricen un plan no ejecutado por resultar lesivo del bien jurídico orden público. Por tal motivo, corresponde señalar que las leyes de amnistía fiscal exigen para la obtención del beneficio que el contribuyente regularice su situación fiscal sea abonando todo lo adeudado o acogiéndose a un plan de pagos que debe respetar a condición del sostenimiento del beneficio concedido. En el caso de marras, y al tratarse la asociación ilícita fiscal de un delito de peligro abstracto, para cuya configuración no exige la concreción de una efectiva lesión al bien jurídico tutelado es que cabe concluir que resulta conceptual y materialmente imposible que este tipo penal tributario pudiera estar alcanzado por las leyes de amnistía fiscal. Postura ésta que fue sostenida en diversos fallos de la jurisdicción -autos caratulados “Cuello, Fernando Luis y otros s/Asociación Ilícita Fiscal (Expte. N°62000069/2008)” tramitados por ante el TOF2, sentencia confirmada por la CFCP, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad.

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

Por lo expuesto, conforme los actuales criterios de la CSJN que sostiene que resultarían arbitrarios aquellos pronunciamientos que omitieren aplicar alguna norma que resultaba pertinente sin declarar su inconstitucionalidad, corresponde en consecuencia declarar la inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario N° 608/2024, artículo 1, por cuanto subvierte el espíritu y finalidad de la ley reglamentada y, en consecuencia, no hacer al pedido de sobreseimiento de los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi por el delito de asociación ilícita fiscal, peticionado por los Dres. Facundo Cortés Olmedo y Rodrigo Altamira -Defensor Público Oficial-.

Por último, con relación al pedido de sobreseimiento a favor de Cristian Eduardo Herrera en orden al delito de evasión agravada (art. 2 del Régimen Penal Tributario) y al pedido de sobreseimiento en orden al delito de lavado de activos efectuado por la UIF adhiero a las consideraciones y conclusiones arribadas por el magistrado preopinante. Así voto.

**Voto del Juez de Cámara Dr. Julián Falcucci dice:**

Acerca del planteo de sobreseimiento —en orden al delito de asociación ilícita— formulado por las defensas, voy a disentir con las consideraciones y conclusiones arribadas por mis colegas preopinantes. Ello por cuanto, considero que el artículo 1 del Decreto Reglamentario N°608/24 es constitucionalmente válido y, en consecuencia, la cancelación total tributaria de la deuda me habilita a evaluar si, cumplidos los requisitos legales, corresponde extinguir la acción penal de los imputados por el delito previsto en el art. 15 inc. c) de la ley 27.430.

De manera inicial, es preciso señalar el marco normativo aplicable a la cuestión bajo análisis. Al respecto, cabe mencionar que recientemente se sancionó la Ley N° 27.743 denominada “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” (fecha 27/06/24, publicada en el B.O. 8/7/24) que contempla dos regímenes diversos: “Regularización de Obligaciones Tributarias Aduaneras y de la Seguridad Social” (Título I) y “Régimen de Regularización de Activos” (Título II). Por su naturaleza jurídica, ésta es una ley de blanqueo o amnistía

---

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

## *Poder Judicial de la Nación*

fiscal que otorga beneficios y exenciones fiscales a los contribuyentes con la finalidad de aumentar la recaudación de la hacienda pública.

En este caso, nos concierne analizar el primer capítulo de la normativa, referido —en lo que aquí interesa— a la regularización de las obligaciones tributarias.

En ese marco, el artículo 5 de la referida ley establece: *El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.*

***La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen. (...)***

La referida norma fue reglamentada por el Decreto 608/2024 del Poder Ejecutivo de la Nación, y en lo que respecta al REGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL —es decir, al régimen previsto en el Título I—, el art. 1 establece: ***La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad.***

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

De ello, se vislumbra que el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. C de la Ley Penal Tributaria), está incluido de manera expresa como un tipo penal plausible de acceder a los beneficios del régimen de regularización previsto en la Ley 27.743.

En virtud de ello, conforme surge de las constancias de autos, el imputado Cristian Eduardo Herrera con fecha 16/08/2024, canceló íntegramente en los términos de la ley 27.743 la deuda tributaria que diera origen a la imputación de evasión impositiva —hecho que se encuentra en investigación ante el Juzgado Federal N°1— en el marco de la asociación ilícita fiscal que habría integrado junto a Micaela Schörnig, Ignacio Herrera y Carlos César Bonaldi, conforme surge del auto de elevación a juicio. En virtud de ello, la defensa de los imputados solicitó se aplique lo dispuesto en el art. 5 de la ley 27.743 y se dicte sobreseimiento a favor de los imputados.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto Reglamentario 608/24 por entender —según los argumentos que expuso— que el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades reglamentarias al incluir el tipo penal de asociación ilícita fiscal entre los supuestos que habilitan la extinción de la acción penal prevista en el párrafo segundo del art. 5. Por esa razón rechazó el planteo de la defensa.

Al objeto del planteo de inconstitucionalidad efectuado por el Ministerio Público Fiscal es preciso consignar el concepto —plasmado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— según el cual la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal “es un acto de suma gravedad y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y que por ello debe considerarse como la última ratio del orden jurídico y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, o bien cuando se trata de una objeción constitucional palmaria, de tal forma que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera” (cfr. CSJN, Fallos: 258:60; 292:211; 296:22, entre otros).

En este sentido, el máximo Tribunal del país ha señalado que la inconstitucionalidad sólo puede operar cuando no resta posibilidad



## *Poder Judicial de la Nación*

interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que forman parte de ella (CSJN, Fallos: 285:322; 288:325; 290:226).

De tal modo, el carácter excepcional de la declaración de inconstitucionalidad de una norma obliga a efectuar una valoración precisa de las circunstancias del caso, a los efectos de establecer si concurren extremos de gravedad institucional que la justifiquen, por constatación —en definitiva— de una contradicción manifiesta de una ley con la cláusula constitucional.

Ahora bien, un detenido análisis del caso a la luz de los principios constitucionales que rigen nuestro sistema penal no pone de manifiesto dicha contradicción.

El artículo 99 de la Constitución Nacional de la República Argentina regula las facultades del presidente de la Nación. Así, en el inciso 2 se establece que tiene la atribución de expedir reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, **cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.**

Es que contrastando la inclusión efectuada en el art. 1 del decreto reglamento respecto a la posibilidad de amnistiar el delito de asociación ilícita fiscal con las previsiones de la ley 27.743, no advierto que se altere su espíritu.

Sobre este punto, comparto el criterio fijado por las señoras Juezas de Cámara, Dras. Carolina Prado y Noel Costa, en autos “Santiago, Oscar y otros p.ss.aa Inf. Ley 24.769” (Expte. N° 12000035/2012/TO1) en el que destacan que la norma reglamentaria solo tiene por función especificar los pormenores o detalles, señalar las condiciones, circunstancias, entre otras aristas y, en este sentido, el decreto bajo análisis no hace más que puntualizar —en forma limitada— los tipos penales delictivos pasibles de acceder al régimen de regularización.

En tal sentido, las magistradas expresaron:

Para que un decreto reglamentario sea excesivo, y así, contrario a la norma a la que se refiere y posibilite cuestionar su validez, debería

~~desconocer o restringir irrazonablemente derechos que la ley reglamentada~~

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

otorga, o bien ir en contra de su espíritu o finalidad, lo que requiere un sólido desarrollo argumental que lleve, como última ratio, a la invalidación de la norma cuestionada.

Así pues, la potestad reglamentaria habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contempladas por el legislador de una manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que ésta.

La ley reglamentada se refiere a conductas previstas en el Régimen Penal Tributario sin hacer ninguna exclusión que permita concluir que el Poder Ejecutivo se excedió al incluir a la asociación ilícita fiscal en el decreto reglamentario. Y, en definitiva, la asociación ilícita, es un delito previsto en dicho régimen penal especial. Así, es de advertir que, contrario a establecer excepciones arbitrarias, el Decreto aclara los términos de la ley en busca de cumplir los fines de la norma.

Al respecto, tal como aduce la defensa, el decreto reglamentario es coherente con el fin esencial de la norma que reglamenta, vale decir, la necesidad recaudatoria del fisco, pues busca eficacia, efectividad y éxito del plan de recaudación. Es decir, el éxito de norma se pondría en duda si sus beneficios se aplicaran solo a una parte de los delitos que integran el catálogo represivo penal tributario y no a otros. Como ocurre en este caso, en el que los imputados se encuentran acusados por ambos delitos -evasión y asociación ilícita-.

Si se miran bien los términos del Decreto bajo análisis, no puede pasar inadvertido que limita la amnistía de la asociación ilícita fiscal a los casos donde las obligaciones tributarias regularizadas hayan sido incumplidas en el marco de aquel supuesto acuerdo delictivo. Es decir, para el Poder Ejecutivo no toda asociación ilícita queda abarcada por la amnistía, sino aquella en el marco de la cual se habrían cometido los supuestos delitos tributarios -en este

Fecha de firma: 11/04/2023

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023



## *Poder Judicial de la Nación*

caso la evasión impositiva- cuya omisión material se regulariza en el marco de la ley 27.743.

Por su parte, en cuanto a lo alegado por el el fiscal general de que en el debate parlamentario no se mencionó la posibilidad de extingue la acción penal por el delito de asociación ilícita, viene oportuno recurrir nuevamente a las consideraciones efectuadas por las Dras. Carolina Prado y Noel Costa, en autos “*Santiago...*” del cual ya se hizo mención. Al abordar esta cuestión sostuvieron:

Conviene acotar, por su parte, que asiste razón al Fiscal General cuando señala que durante el debate parlamentario no se mencionó específicamente al delito de asociación ilícita fiscal dentro de los tipos penales tributarios que contemplaba la norma; por el contrario, se hizo una mención genérica que englobaba a tipos penales tributarios y aduaneros, como así también a delitos comunes vinculados a aquellos. Esto denota, a las claras, que la reglamentación no incurrió en extralimitación alguna, habida cuenta que el ilícito de asociación ilícita tributaria integra —ni más ni menos— que uno de los delitos fiscales.

En este sentido, pueden destacarse algunos pasajes de la transcripción del debate parlamentario: *Sr. Atauche.- “(...) El proyecto propone la posibilidad de regularizar distintos tipos de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social por obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.*

*Se excluyen del régimen a los condenados por alguno de los delitos pre - vistos en el Código Aduanero o en las leyes penales tributarias – anteriores y vi- gentes– con anterioridad a la vigencia de la ley, siempre que la condena no es- tuviera cumplida; a los condenados por delitos comunes*

USO OFICIAL

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

*que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, y a las personas jurídicas en las que sus socios o representantes hubieran sido condenados por alguna de estas normas. En estos dos últimos casos, con sentencia firme y siempre que la condena no estuviera cumplida. También están excluidos los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y causa elevada a juicio oral por la comisión de los delitos relacionados con la evasión de aportes y contribuciones.*

*Asimismo, se excluyen en forma expresa determinadas obligaciones. Por ejemplo, los aportes y las contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales o al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, las deudas por cuotas destinadas a las ART, las obligaciones y las infracciones vinculadas con regímenes promocionales, etcétera.*

*Los contribuyentes que se adhieran a la moratoria pueden beneficiarse con descuentos en intereses resarcitorios y punitorios, que varían según la fecha en que se adhieran al régimen; condonación de multas e intereses; reducción de honorarios en deudas en discusión administrativa o judicial; la suspensión de acciones penales tributarias aduaneras, etcétera.*

*El acogimiento al régimen produce la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción. La cancelación total de la deuda produciría la extinción de la acción penal en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. También quedaría extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley en la medida en que no exista sentencia firme.*

---

*Fecha de firma: 20/11/2024*

*Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO*

*Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA*



#38330845#436023590#20241120124903023

# *Poder Judicial de la Nación*

*Título II. Régimen de Regularización de Activos. Propone la creación de un Régimen de Regularización de Activos. Este régimen de blanqueo abarca tanto a personas humanas como a sucesiones indivisas y a los sujetos especi- ficados en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.*

*Mediante esta medida se busca que se regularicen activos no declara- dos, obteniendo el beneficio de las condiciones que se van a ofrecer.*

*En el blanqueo de 2016 la AFIP informó que se recaudaron 149.000 mi- llones a través del Régimen de Sinceramiento Fiscal. Los sujetos alcanzados pueden ser residentes o no residentes y pueden adherirse al régimen por los bienes situados en la Argentina o por las rentas de fuente argentina. Aquellos que fueron residentes fiscales argentinos y ahora no lo son, pueden adherirse al régimen como si fueran residentes. Esto implica que adquirirán nuevamente la residencia tributaria.*

*En cuanto al plazo de adhesión al régimen, se extenderá hasta el 30 de abril de 2025. El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive, dividiéndose en tres etapas con diferentes efectos impositivos respecto del impuesto a ingresar.*

*El régimen permite la regularización de activos locales y del exterior, incluyendo, pero no limitándose, a moneda nacional o extranjera, inmuebles radicados en Argentina o en el exterior, participaciones accionarias, derechos de fideicomisos, títulos de valores y créditos de cualquier naturaleza, y otros bienes similares.*

*El proyecto prevé la posibilidad de incluir bienes que se encuentren bajo propiedad, posesión o tenencia de terceros, siempre que dichos terceros no sean excluidos del régimen.*

USO OFICIAL

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

*Son sujetos excluidos del régimen funcionarios públicos, familiares de funcionarios y personas procesadas por ciertos delitos, entre otros.*

*Se encuentran excluidos los títulos de valores o tenencias de dinero en el exterior cuando se encuentren depositados en entidades financieras o agentes de custodia ubicados en países calificados como de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera, cuidando que el origen de los fondos no provenga de fuentes ilícitas. Se mantiene la obligación de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. (...)" (Diario de sesiones 12/06/2024).*

*"Sr. Brügge.- (...) Concretamente, en el punto referido a la liberación de las acciones penales, como una consecuencia del acogimiento o la adhesión a esta regularización, se establece la liberación de las acciones penales previstas en este artículo, que equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal. O sea, es como una amnistía.*

*Entendemos también que deben estar exceptuados -y por eso hacemos al agregado-, con excepción de los delitos previstos en los artículos 303 y 304 del Código Penal, justamente sobre delitos de lavado de activos." (Diario de sesiones 29/05/2024).*

En esta línea, no puedo dejar de señalar, para zanjar la cuestión planteada por el fiscal general, que en mi tarea de interprete de la ley no puedo soslayar los principios constitucionales que permiten desentrañar el verdadero sentido y alcance de las normas que regulan cuestiones penales.

Así, cabe señalar que, el principio *pro homine* impone que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el



## *Poder Judicial de la Nación*

contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Es decir, entre dos normas o interpretaciones aplicables a un mismo caso, debe prevalecer la que más proteja a la persona.

Dicho principio tiene base en normas constitucionales (arts. 16, 18, 31 y 75 inciso 22 —tratados internacionales con jerarquía constitucional—). Puntualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha consagrado este principio en su art. 29. Así, analizado este caso, estoy en condiciones de sostener que interpretar el alcance del art. 1 del Decreto con el sentido que le ha dado el fiscal general, es limitar los derechos de los justiciables.

En esta línea, debo sostener que el planteo de inconstitucional planteado por el Ministerio Público Fiscal no puede tener favorable acogida, toda vez que no se advierte que el poder Ejecutivo se haya excedido al reglamentar la ley 27.743, en violación al principio de legalidad.

Zanjada esta cuestión, corresponde analizar si corresponde declarar la extinción de la acción penal de los imputados en virtud de lo dispuesto por el art. 5 de ley 27.743.

De conformidad a las constancias de autos Cristian Eduardo Herrera se adhirió a un plan de pagos a los fines de regularizar la deuda tributaria que mantenía con el Fisco. Que, conforme surge de documentación que acompaña, con fecha 16/08/24 canceló en forma total la deuda, según plan N° T354255.

Asimismo, el art. 1 del Decreto Reglamentario dispone que la cancelación de las obligaciones incluidas en el marco previsto en régimen del Título I de la ley 27.743 producirá la extinción de la acción penal respecto de todos los partícipes. Ello, me lleva a extender el beneficio a todos los imputados a quienes se le atribuye el hecho nominado segundo en esta causa.

Por otro lado, cabe señalar que los imputados no se encuentran inmersos en las causas de exclusión del régimen de regularización excepcional previstas en el art. 4 de la ley 27.743

Así, verificadas las pautas y condiciones establecidas en la ley 27.743,

corresponde extinguir la acción penal seguida en contra de los imputados

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

USO OFICIAL

Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi en orden al delito de asociación ilícita fiscal, previsto en art. 15, inc. "c", Ley 24.769 CP (art. 5 de la ley 27.743 y art. 1 Decreto Reglamentario 608/24) y, en consecuencia, disponer sus sobreseimientos por el hecho nominado segundo (arts. 334 y 336 inc. 1, CPPN).

Por último, en relación con el pedido de sobreseimiento a favor de Cristian Eduardo Herrera en orden al delito de evasión agravada (art. 2 del Régimen Penal Tributario) y el pedido de sobreseimiento en orden al delito de lavado de activos, efectuado por la UIF, adhiero en un todo a las consideraciones y conclusiones arribadas por los magistrados preopinantes. Así voto.

De acuerdo al resultado de los votos emitidos

**SE RESUELVE:**

Por mayoría:

**I.-DECLARAR** la inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto Reglamentario 608/2024, en cuanto dispone incluir dentro del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, el delito previsto en el art. 15 inc. "c" de la Ley 24.769 (Asociación Ilícita Fiscal).

**II.- NO HACER LUGAR** al pedido de sobreseimiento de los imputados Cristian Eduardo Herrera, Micaela Schörnig, Ignacio Guillermo Herrera y Carlos César Bonaldi en orden al delito de asociación ilícita fiscal efectuado por el Dr. Facundo Cortés Olmedo y el Defensor Público Oficial, Dr. Rodrigo Altamira (arts. 15 inc. C del Régimen Penal Tributario Ley 27.430, 336 inc. 1 del CPPN y 59 inc. 2 del CP, *a contrario sensu*)

Por unanimidad:

**III.- NO HACER LUGAR** al pedido de sobreseimiento de Cristian Eduardo Herrera con relación al delito de evasión agravada (art. 2 del Régimen Penal Tributario) efectuada por el Dr. Facundo Cortés Olmedo y, en consecuencia, **REMITIR** copia de la presentación al Juzgado federal N°1, a sus efectos.

---

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023

# *Poder Judicial de la Nación*

**IV.- NO HACER LUGAR** a la solicitud de sobreseimiento por el delito de lavado de activos por atipicidad solicitado por la Unidad de Información Financiera (art. 303 inc. 1 del CP).

Protocolícese y hágase saber. -

JAIME DÍAZ GAVIER  
JUEZ DE CÁMARA

JULIÁN FALCUCCI  
JUEZ DE CÁMARA

JOSÉ FABIÁN ASIS  
JUEZ DE CÁMARA

USO OFICIAL

HERNÁN MOYANO CENTENO  
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 20/11/2024

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38330845#436023590#20241120124903023